



Consejo de Seguridad

Distr. general
15 de junio de 2020
Español
Original: inglés

Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití

Informe del Secretario General

I. Introducción

1. Este informe se presenta en cumplimiento de la resolución [2476 \(2019\)](#) del Consejo de Seguridad, en la que se estableció, a partir del 16 de octubre de 2019 y por un período inicial de 12 meses, la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH) y se me solicitó que, a partir de esa fecha, lo informase cada 120 días sobre la aplicación de dicha resolución, incluidos todos los casos de incumplimiento del mandato y las medidas adoptadas para subsanarlos. El documento recoge los hechos más destacados que ocurrieron tras la publicación de mi informe anterior ([S/2020/123](#)) y ofrece información actualizada sobre la aplicación del mandato de la BINUH y sobre las actividades de apoyo de las Naciones Unidas al Gobierno de Haití en el contexto de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19).

2. La BINUH y los 19 organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas en Haití han estrechado su colaboración y están trabajando con la unidad de acción preconizada en la iniciativa Una ONU, como aconsejó el Consejo de Seguridad. Para cumplir su mandato, la BINUH ha interpuesto buenos oficios estratégicos, ha realizado actividades de asesoramiento y promoción en aras de la estabilidad política y ha desarrollado procesos de gobernanza inclusivos e iniciativas de reducción de la violencia, complementando así la labor de apoyo programático y técnico que lleva a cabo el equipo de las Naciones Unidas en el país.

II. Política y buena gobernanza (parámetro de referencia 1)

3. El 19 de marzo de 2020 se confirmaron los primeros casos de COVID-19 en Haití. Los 18 meses anteriores habían estado marcados por la agitación y los intentos infructuosos de negociar un acuerdo que pusiera fin a la larga crisis que había paralizado las instituciones del país. El Gobierno debía enfrentar el reto de elaborar y aplicar un ambicioso programa de reformas al tiempo que trataba de reactivar una economía maltrecha en medio de una pandemia de incierta evolución que el sistema de salud del país no estaba preparado para controlar. Pese a la disminución de los disturbios civiles violentos que habían caracterizado las constantes protestas contra el *peyi lòk* (bloqueo forzoso total del país) de 2019 y al cese temporal de las hostilidades políticas solicitado por la oposición moderada, la incertidumbre y la polarización políticas siguen reinando debido a la falta de un órgano legislativo, la imprecisión de las próximas citas electorales y la incertidumbre sobre el calendario



de reformas constitucionales y estructurales. Esta dinámica se mantiene mientras aumenta la actividad de las bandas y se afianza la sensación de inseguridad.

4. En febrero de 2020 concluyeron sin resultados las negociaciones que el Presidente de Haití, Jovenel Moïse, había puesto en marcha antes de terminar su mandato para consensuar un acuerdo político que allanara el camino a las reformas estructurales. Del 11 al 14 de febrero, tras varias reuniones preparatorias, la BINUH y el Comité Haitiano de Iniciativa Patriótica facilitaron, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), una nueva ronda de negociaciones entre representantes de la Presidencia, los signatarios del “Acuerdo de Kinam” y el “Acuerdo de Marriott”, los partidos de la oposición no alineados y la sociedad civil, que retomaron las negociaciones que se habían mantenido en la Nunciatura Apostólica en diciembre de 2019 y enero de 2020 en el punto en que se habían dejado. Las conversaciones entraron en punto muerto el 14 de febrero cuando algunos representantes de la oposición presentaron una propuesta en la que se planteaban cuestiones sobre asuntos ya tratados en anteriores rondas de conversaciones. A pesar de ese revés, se mantuvieron las consultas oficiosas entre agentes haitianos, que llevaron a celebrar el 28 de febrero una reunión en un grupo más reducido de representantes de la Presidencia, los partidos de la oposición no alineados y la sociedad civil. Sin embargo, las principales fuerzas políticas asociadas tanto a la coalición gobernante como a la oposición decidieron no asistir, por lo que no pudo llegarse a un acuerdo.

5. Tras esos esfuerzos, y al no existir un órgano legislativo operativo, el Sr. Moïse emitió el 2 de marzo un decreto en el que nombraba Primer Ministro al Sr. Joseph Jouthe, ex Ministro de Medio Ambiente. El 4 de marzo, el Sr. Jouthe presentó su Gobierno, compuesto por 19 ministros (4 de ellos mujeres) y nueve secretarios de Estado (dos de ellos mujeres), y señaló que sus prioridades serían la inseguridad, las desigualdades sociales y la reactivación de la economía. Aunque el nuevo gabinete se presentó como exponente de cierto grado de inclusión política, varios representantes de la oposición afirmaron que su composición no tenía en cuenta los avances logrados en conversaciones recientes y socavaba las posibilidades de que se reanudasen. Aunque la oposición había anunciado que preveía reiniciar las protestas callejeras al comienzo del brote de COVID-19, varios partidos de la oposición, incluidas facciones que anteriormente habían condicionado su participación en las conversaciones políticas a la salida inmediata del Presidente, declararon que no harían nada que pudiera comprometer la cohesión nacional y la capacidad de luchar eficazmente contra la pandemia.

6. Tras una propagación inicial lenta, el número de casos confirmados de COVID-19 empezó a aumentar con rapidez a mediados de mayo hasta llegar a 3.072 infectados y 50 muertos el 7 de junio. Según las proyecciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), podría llegarse a 127.000 casos, 5.000 muertes y 25.000 hospitalizaciones. El Gobierno ha puesto en marcha una campaña de divulgación en la que informa a los ciudadanos y a sectores clave de la sociedad haitiana de sus esfuerzos por mitigar los efectos de una pandemia a la que Haití podría ser especialmente vulnerable. El Presidente dirigió siete discursos a la nación en los que hizo un llamamiento a la unidad nacional, instó a la población a que siguiera las directrices del Ministerio de Salud Pública y Población, alertó contra la estigmatización de las personas infectadas y prometió luchar contra la crisis de manera eficaz y transparente, y responder al mismo tiempo a las urgencias socioeconómicas. El 6 de abril, el Presidente anunció que, para coordinar la respuesta nacional a la pandemia, se constituiría una comisión multisectorial encabezada por Jean William Pape, médico de renombre y fundador de la principal institución de investigación y tratamiento del VIH de Haití, los Centros Gheskio, y Lauré Adrien, Director General del Ministerio de Salud Pública y Población. Aunque la mayoría de

los haitianos acogió favorablemente la constitución de esa comisión, los medios de comunicación del país se hicieron eco de varias acusaciones contra el Gobierno por falta de transparencia en la compra de equipo y material para luchar contra la pandemia. En la región, las autoridades haitianas y sus homólogos de la República Dominicana han reforzado su cooperación en respuesta a la pandemia. Los Ministros de Relaciones Exteriores han celebrado periódicamente videoconferencias y los dos Jefes de Estado se reunieron por medios telemáticos el 19 de mayo para examinar las sinergias en la respuesta a la COVID-19 y otros asuntos de interés común.

7. A pesar de los nuevos problemas surgidos a raíz de la pandemia, la BINUH, junto con el equipo de las Naciones Unidas en el país, siguió prestando asistencia a las iniciativas nacionales de reforma de la gobernanza, entre las que cabe mencionar la planificación de un proceso de reforma constitucional, la celebración de las elecciones legislativas y locales pendientes y la organización de elecciones presidenciales. La Misión utiliza plataformas virtuales para comunicarse con los asociados haitianos, incluida la Presidencia, que sigue trabajando activamente para avanzar cuanto sea posible en las actuales circunstancias. Por ello, el Consejo Electoral Provisional, con apoyo de las Naciones Unidas, está estudiando medidas para preservar la integridad del proceso electoral y, como el número de parlamentarias en Haití suele ser bajo (4 de 149 en la 50ª legislatura), está tratando de conseguir que, como se prevé en el artículo 17.1 de la Constitución, las mujeres ocupen el 30 % de los cargos electivos, una medida a la que el Presidente se comprometió en un discurso pronunciado con motivo del Día Internacional de la Mujer. Además, con el apoyo del PNUD y la International Foundation for Electoral Systems, el Consejo organizó la cuarta sesión de un curso de capacitación de ocho módulos sobre administración electoral y sigue modernizando la infraestructura informática de gestión de elecciones. Además, se abonaron al personal siete meses de sueldos atrasados por demoras del Tribunal Superior de Cuentas y de lo Contencioso Administrativo en la aprobación de contratos, entre otras medidas del Gobierno para paliar los efectos económicos del brote en la función pública. No obstante, las actividades del Consejo se han ralentizado debido a la incertidumbre generada por la ausencia de un calendario electoral y la actual emergencia sanitaria.

8. Los avances en la revisión del censo electoral, que se elaborará a partir de los registros de ciudadanos para los nuevos documentos de identidad biométricos, se ralentizaron inicialmente tras el anuncio del estado de emergencia. Las críticas generalizadas en medios sociales por las aglomeraciones que se producían ante la Oficina de Identificación Nacional de Puerto Príncipe hicieron que se adoptaran nuevas medidas de control de multitudes que también mejoraron las directrices de distanciamiento físico. Al 22 de mayo, dicha Oficina había registrado a unos 2,1 millones de los aproximadamente 6,8 millones de ciudadanos haitianos en edad de votar y había expedido 1,1 millones de nuevos documentos de identidad biométricos, indispensables para la identificación de los votantes en las elecciones. No obstante, el Gobierno también ha prorrogado indefinidamente la validez de las antiguas tarjetas de identidad, revocando una decisión anterior de ir las eliminando gradualmente hasta el 31 de marzo.

9. Valiéndose de los buenos oficios y el poder de convocatoria de mi Representante Especial para Haití, la BINUH ha conseguido que interesados nacionales pertinentes contribuyan a alentar unas relaciones constructivas entre el poder ejecutivo y la oposición y a promover la colaboración de múltiples interesados para hacer frente a la emergencia sanitaria. La Misión también difundió mensajes de prevención y tolerancia y trató de suscitar un amplio apoyo de los asociados internacionales a las medidas de respuesta del Gobierno, cuyas intervenciones se coordinan estrechamente con las del sistema de las Naciones Unidas en apoyo a la acción nacional en tres esferas distintas pero complementarias, a saber, la respuesta sanitaria, dirigida por la

OPS y la Organización Mundial de la Salud (OMS); la respuesta humanitaria, coordinada por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios; y la respuesta socioeconómica, a cargo del PNUD. Mi Representante Especial Adjunto, que también actúa como Coordinador Residente y Coordinador de Asuntos Humanitarios, vela por una respuesta integrada que sirva para aprovechar al máximo las ventajas comparativas de cada componente del sistema de las Naciones Unidas en Haití.

III. Reducción de la violencia comunitaria (parámetro de referencia 2)

10. Haití experimentó un aumento general de los delitos y la actividad de bandas delictivas en los primeros meses de 2020, incluso después de que se hubieran aplacado en gran medida las protestas de 2019, que habían agravado la inseguridad. Aunque en el primer trimestre de 2020 solo se registraron 30 protestas, la violencia fue particularmente notoria durante las protestas de agentes de policía por cuestiones laborales, que culminaron, el 23 de febrero, con enfrentamientos de un grupo formado por unos 100 agentes de policía, en su mayoría fuera de servicio, y sus simpatizantes, con miembros de las Fuerzas Armadas de Haití. Entre el 1 de enero y 31 de mayo, el número de homicidios dolosos denunciados aumentó un 33 %, al registrarse 616 casos (correspondientes a 591 varones, entre ellos 11 agentes de policía y 19 menores, y 25 mujeres, 4 de ellas menores). El 75 % de esos casos se produjeron en el Departamento del Oeste, donde la delincuencia es tradicionalmente más frecuente debido a la competencia de las bandas por el control de los barrios marginales de Puerto Príncipe. El país también registró un aumento del 200 % en los secuestros denunciados, ya que la Policía Nacional de Haití registró 92 casos entre el 1 de enero y el 30 de mayo (57 varones, 11 de ellos menores, y 35 mujeres, 8 de ellas menores). En febrero se llegó al máximo de 50 secuestros denunciados, cifra que disminuyó a 25 entre marzo y mayo. Constan 34 denuncias por violencia sexual y de género en los cinco primeros meses de 2020, lo que supone una disminución con respecto a las 31 presentadas en los cinco meses anteriores.

11. La necesidad de las bandas locales de conseguir fuentes alternativas de ingresos al terminar el *peyi lòk* reavivó los enfrentamientos entre ellas y provocó reorganizaciones y cambios de alianzas. El fenómeno cobró particular fuerza en Puerto Príncipe (Departamento del Oeste) y en el Departamento Artibonito, que registraron subidas constantes de los incidentes relacionados con bandas en Cité Soleil, Croix-des-Bouquets, Martissant y Village de Dieu durante los dos primeros meses de 2020, cuando las bandas trataban de ampliar sus respectivas zonas de control. El renovado afán por obtener recursos tras el *peyi lòk* tal vez haya contribuido al aumento de los secuestros en febrero, que llevó al Canadá, los Estados Unidos de América y Francia a publicar avisos en los que se desaconsejaba viajar a Haití.

12. En reacción a la indignación ciudadana por el aumento de los secuestros, la Policía Nacional de Haití emprendió grandes operaciones policiales en las que se emplearon mejores estrategias de inteligencia y definición de objetivos para aplacar la ola de secuestros. Las detenciones de miembros y líderes de bandas pasaron de 169 en enero y febrero a 232 en marzo y abril, y los secuestros han disminuido considerablemente desde marzo. Las operaciones contra las bandas se mantuvieron incluso después de que se movilizara a la policía para hacer cumplir las medidas adoptadas por el Gobierno a raíz del brote de COVID-19. Sin embargo, esa violencia llegó a su apogeo en la segunda quincena de abril, en la que se produjeron varios altercados entre bandas y enfrentamientos con la policía en los barrios de Bicentenaire, Grand-Ravine, Martissant y Village-de-Dieu de Puerto Príncipe, cuando los miembros de bandas empezaron a oponerse a las medidas disuasorias de la policía contra los secuestros.

13. La Comisión Nacional Haitiana para el Desarme, la Desmovilización y la Reintegración afianzó su función de entidad nacional encargada de la dirección estratégica de operaciones de reducción de la violencia comunitaria. El 4 de mayo sometió a la aprobación del Primer Ministro una estrategia nacional que se elaboró consultando a asociados nacionales e internacionales, con el asesoramiento técnico de las Naciones Unidas. La intervención de la Comisión fue decisiva para lograr que varias bandas rivales aceptaran una tregua temporal de un mes en el barrio de La Saline de Puerto Príncipe y las zonas adyacentes. Además, la Comisión desempeñará una función esencial en el desembolso del primer tramo (17 millones de dólares) de un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo con una dotación financiera de 40 millones de dólares, que comprende un importante componente de dinero a cambio de trabajo en barrios controlados por bandas.

14. Entre otras medidas de lucha contra la pandemia, la Comisión está trabajando con instituciones públicas competentes, las Naciones Unidas y asociados internacionales que participan en la distribución de alimentos y equipo de protección en zonas controladas por bandas a fin de facilitar el contacto con las comunidades locales para que esa labor no se vea entorpecida. Participa además en actividades de sensibilización, en particular contra la estigmatización de las personas presuntamente infectadas, fenómeno que ha dado lugar a ataques contra centros de salud que estaban preparándose para atender esos casos.

15. La proliferación de armas y municiones ilícitas sigue agudizando la inseguridad. La BINUH y el PNUD están colaborando estrechamente con las autoridades nacionales, en el marco de un proyecto del Fondo para la Consolidación de la Paz, y con el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe, en la elaboración de leyes de control de armas compatibles con las normas internacionales. Además, la Misión está trabajando con el Instituto de las Naciones Unidas de Investigación sobre el Desarme para realizar una evaluación de referencia del ciclo de vida de las armas y las municiones en Haití. Aunque esas iniciativas requerirán una labor *in situ*, los preparativos se están llevando a cabo a distancia.

IV. La justicia y el estado de derecho (parámetro de referencia 3)

16. A pesar de las difíciles condiciones del período sobre el que se informa, se siguió avanzando en los sectores policial, judicial y penitenciario. La BINUH, junto con organismos competentes de las Naciones Unidas y otros agentes, abogó por que se agilizará la liberación de presos y detenidos, entre otras medidas para reducir las posibilidades de propagación de la pandemia en un sistema penitenciario masificado. Al comienzo de la crisis, el Ministro de Justicia y Seguridad Pública encomendó a las 18 fiscalías que redujeran el número de detenidos mediante audiencias especiales expeditas. A propuesta de la BINUH, en dos jurisdicciones en las que las sentencias se habían visto empañadas por irregularidades, se revisaron los procesos con el fin de incorporar audiencias especiales a instancias colectivas en casos de personas que cumplieran los requisitos necesarios para la liberación anticipada, con lo que se garantizaba la legalidad de los procedimientos y se reducían las posibilidades de corrupción asociadas a la liberación de delincuentes peligrosos.

17. Para fomentar las liberaciones, las Naciones Unidas y algunos asociados internacionales ayudaron a establecer un comité rector en materia de detenciones integrado por funcionarios gubernamentales y judiciales, la Oficina del Defensor del Pueblo, que es la institución nacional de derechos humanos de Haití, y defensores de los derechos humanos. A partir de seis criterios de idoneidad definidos por ese comité,

el Ministro de Justicia y Seguridad Pública aprobó directrices para poner en libertad a reclusos de cualquier jurisdicción, incluidas las personas en prisión preventiva prolongada (que representan el 74 % de la población carcelaria total y el 85 % de los niños privados de libertad) y las que cumplen los requisitos de liberación anticipada por motivos humanitarios. Gracias a las audiencias especiales y a una aplicación limitada de esos criterios, el sistema penitenciario de Haití, que el 3 de junio tenía 10.708 reclusos (entre ellos 341 mujeres y 126 menores), liberó a 750 personas (entre ellas 68 mujeres y 22 menores), lo que supone una reducción del 2,9 % de la tasa de ocupación de las prisiones con respecto a los datos de mi último informe. Así y todo, no se ha llegado a liberar al mínimo de 5.000 reclusos que se considera necesario para que las cárceles y centros de detención de Haití puedan gestionar mejor la incidencia de la pandemia. La indignación social por las liberaciones indebidas y la aversión al riesgo de muchos agentes judiciales y políticos han limitado las iniciativas de liberación.

18. Antes de que surgiera la pandemia, la Dirección de Administración Penitenciaria había acometido mejoras de las condiciones de reclusión de la población carcelaria. Con el apoyo de la BINUH, de organismos de las Naciones Unidas como el PNUD, la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), y de asociados internacionales, la Dirección elaboró un plan de contingencia para prevenir, mitigar y controlar la pandemia consistente, entre otras cosas, en distribuir equipo de protección y kits de higiene y realizar campañas de concienciación que tengan en cuenta las cuestiones de género. Sin embargo, el 15 de mayo, la Cárcel Nacional de Puerto Príncipe informó de 11 casos de COVID-19 entre sus reclusos, lo que puso de manifiesto que la Dirección carecía de los recursos necesarios para aplicar medidas adecuadas de confinamiento o para almacenar alimentos y suministros médicos en previsión de interrupciones en la cadena de suministro. Sin suficiente financiación pública o de los donantes, las condiciones de reclusión, que se caracterizan por el hacinamiento, las dificultades de acceso a los servicios de salud y la incapacidad de atender necesidades básicas, hacen que las cárceles de Haití sean particularmente vulnerables a la COVID-19 y otras enfermedades.

19. El sistema de justicia de Haití reaccionó a la aparición de la pandemia ajustando sus operaciones de forma que los tribunales del país pudieran fortalecerse en el futuro. En el marco de sus actividades de mitigación, el Consejo Superior del Poder Judicial pidió a los jefes de las jurisdicciones que instituyeran rotaciones de personal y otras medidas de protección para agentes de la justicia y partes en litigios. Posteriormente, la Red Nacional de Magistrados de Haití presentó una propuesta, elaborada de consuno con la BINUH y el PNUD, sobre la utilización de tecnología de videoconferencia para celebrar por medios telemáticos audiencias y otros procesos judiciales. Esas medidas aumentarán la resiliencia de un sistema judicial que se vio muy afectado por la inseguridad reinante durante el *peyi lòk* y por la suspensión, desde octubre de 2019, de todas las audiencias en la jurisdicción de Puerto Príncipe, ya que los tribunales de primera instancia y de apelación de la capital están situados en una zona en la que se producen frecuentes enfrentamientos entre bandas. No obstante, la apertura de 11 oficinas de asistencia letrada se ha retrasado a causa de la pandemia, a pesar de la colaboración constante entre el Consejo Nacional de Asistencia Letrada y los asociados del sector judicial.

20. La eficaz respuesta del Gobierno a antiguas reivindicaciones de los agentes de la Policía Nacional de Haití permitió mejorar las condiciones de trabajo. Se inspiró en 28 recomendaciones de la Comisión de Facilitación y Diálogo de la policía nacional, creada por el Director General Interino del cuerpo el 24 de febrero y asesorada por la BINUH. En marzo, tras una serie de protestas cada vez más violentas encabezadas por

un pequeño grupo de agentes, el Gobierno aumentó las prestaciones y concedió a los policías el derecho a sindicarse. La resolución del conflicto coincidió con la aparición de un grupo marginal, a veces violento, de policías radicales, en activo y separados del servicio, que siguen haciendo grandes reivindicaciones a pesar de que el primer sindicato de policía fue reconocido oficialmente el 21 de abril. Hasta la fecha, la aplicación de las recomendaciones de los dirigentes de la policía y la reintegración de los líderes de las protestas en pro de la sindicación que habían sido despedidos, han disipado la mayoría de las tensiones. La Policía Nacional de Haití fue más allá de las nuevas disposiciones jurídicas y financieras aplicadas por el Gobierno a fin de mejorar su marco normativo interno. Con el apoyo de la BINUH, se redactaron y aprobaron directrices para crear una dirección de bienestar, un servicio de coordinación sanitaria y un hospital específicamente dedicados a la Policía Nacional de Haití. Además, está pendiente de aprobación por el Consejo de Ministros un proyecto de ley que normaliza la evolución de la carrera profesional dentro del cuerpo.

21. La única fuerza de seguridad de Haití sigue teniendo graves dificultades financieras debido a la congelación del presupuesto nacional desde 2017. A finales de marzo, a mediados del ejercicio económico, se asignó aproximadamente el 55 % del presupuesto de la Policía Nacional de Haití. El 24 de abril, el Primer Ministro liberó el pago de 1.967 nóminas para liquidar los atrasos salariales de larga data que afectaban a las dos clases de agentes de incorporación más reciente en la policía. No obstante, si no se aumenta sustancialmente la financiación se pondrá en peligro la atención de necesidades operativas básicas. Ya se ha suspendido el proceso de contratación de nuevos agentes de policía y guardias de prisiones porque no hay fondos para sufragarlo. Además, dado que la actual tasa de separación del servicio es de unos 400 agentes por año y que entre 2017 y 2020 solo se han incorporado al cuerpo 2.370 personas, la Policía Nacional no cumplirá el objetivo definido en el Plan de Desarrollo Estratégico para 2017-2021 de tener 4.000 nuevos agentes (el 12 % mujeres) para 2021. Al 4 de marzo, el cuerpo dispone de una dotación de 15.172 agentes, de los que poco más del 10 % son mujeres, lo que corresponde a una proporción de 1,3 agentes de policía por cada 1.000 habitantes, cuando la norma internacional es de 2,2.

22. El 19 de marzo se nombró al nuevo Inspector General del Consejo Superior del Poder Judicial, después de que el puesto permaneciera vacante durante un año, un acontecimiento aparentemente menor pero trascendente para la labor de supervisión y rendición de cuentas. Al mismo tiempo, el aumento de las prácticas corruptas en algunas unidades de policía especializadas, que puso de manifiesto la inacción de la policía durante las violentas protestas policiales de febrero y marzo, ha llevado a la Inspección General de la Policía Nacional de Haití a establecer comisiones especializadas para investigar las denuncias de fraude en todo el país.

V. Derechos humanos (parámetro de referencia 4)

23. La situación de los derechos humanos en Haití siguió siendo motivo de preocupación durante el período sobre el que se informa debido a la inseguridad persistente en los barrios de Puerto Príncipe en que operan las bandas, al nuevo deterioro de las condiciones económicas y sociales y a las constantes denuncias de violaciones y conculcaciones de los derechos humanos. El Estado haitiano todavía protege de manera deficiente los derechos de los ciudadanos a la vida, la seguridad y la integridad física debido a los problemas persistentes de aplicación efectiva de la ley y de rendición de cuentas ante la justicia.

24. Se siguieron registrando violaciones y conculcaciones de los derechos humanos, sobre todo durante los enfrentamientos entre bandas en algunas zonas de Puerto

Príncipe. Cabe destacar los que se produjeron a mediados de abril entre varias bandas en el barrio de Martissant, que causaron ocho muertos y 11 heridos entre los residentes y provocaron el desplazamiento de al menos 136 familias. El 18 de abril tuvo lugar otro incidente, un enfrentamiento territorial entre bandas en el barrio de La Saline en el que murieron tres civiles. Esos acontecimientos recuerdan incidentes característicos similares del pasado reciente, como los de Lilavois y Grand Ravine (2017), La Saline (2018) y Bel Air (2019), tras los que no se tomaron medidas judiciales concretas por las violaciones y conculcaciones de los derechos humanos cometidas.

25. Globalmente, en el primer semestre de 2020, cuando la violencia política generó mayores niveles de criminalidad, las violaciones confirmadas de los derechos humanos atribuibles a las bandas superaron a las imputables a la policía. Entre el 1 de enero y el 31 de mayo, la BINUH documentó 470 presuntas violaciones y conculcaciones de los derechos humanos, de las que 93 se achacaban a la Policía Nacional de Haití. El número total de víctimas mortales ocasionadas por las violaciones y conculcaciones documentadas durante el período aumentó considerablemente con respecto a las cifras del informe anterior, ya que se registraron 168 muertos y 123 heridos. También se observó una tendencia a la baja en el número de violaciones de los derechos humanos cometidas por la policía durante las protestas antigubernamentales que paralizaron el país durante el período de *peyi lòk*, de septiembre a noviembre de 2019. Según las investigaciones de las protestas, que concluyeron durante el período que abarca el informe, de las 349 violaciones y conculcaciones de los derechos humanos registradas, 258 (34 muertos y 224 heridos) fueron perpetradas por miembros de bandas e individuos armados no identificados, y 91 (32 muertos y 59 heridos) por agentes del Estado como la policía. Esas mismas estadísticas muestran también que entre las 66 víctimas mortales había 5 mujeres y 5 niños y, entre los 283 heridos, 21 mujeres y 28 niños.

26. Para mejorar la rendición de cuentas por violaciones de los derechos humanos, la Inspección General de la Policía Nacional de Haití reactivó su mesa redonda temática con la sociedad civil, una iniciativa encaminada a mejorar la colaboración entre la policía y la población en general, también en lo tocante a los derechos humanos, y fomentar la confianza al ofrecer de manera transparente a la población información relativa a la policía. La Inspección General recibió 76 denuncias de violaciones de los derechos humanos durante el período que abarca el presente informe, lo que supone un aumento respecto de las 52 denuncias que recibió en el período anterior. Además, se cerraron 37 investigaciones pendientes por violaciones de los derechos humanos iniciadas entre 2005 y 2019, que se remitieron a la Dirección General de la Policía Nacional. El Director General Interino ratificó ocho sanciones a agentes de policía por violaciones de los derechos humanos y cuatro casos se remitieron al sistema de justicia.

27. Durante el período sobre el que se informa no se ha progresado en las estrategias pangubernamentales para mejorar el cumplimiento de las normas de derechos humanos. A pesar del apoyo de la BINUH, el Consejo de Ministros todavía no ha aprobado el plan nacional de derechos humanos que habían avalado, entre otros asociados, los representantes de la sociedad civil y la institución nacional de derechos humanos en diciembre de 2019. La falta de avances ha retrasado el desarrollo de una importante política relativa al programa nacional de derechos humanos que podría mejorar la función de coordinación del Comité Interministerial de Derechos Humanos y facilitar la aplicación de las recomendaciones del Examen Periódico Universal de 2016 y otros mecanismos internacionales en este ámbito. Además, el nuevo Gobierno de Haití no tiene en la actualidad un responsable ministerial en materia de derechos humanos ni un coordinador en el poder ejecutivo que supervise esas cuestiones. Solo un enérgico liderazgo institucional permitirá al Comité Interministerial movilizar a

los ministerios competentes para dar prioridad a la mejora de la situación de los derechos humanos en el país.

28. La pandemia de COVID-19 ha agravado las vulnerabilidades existentes en la población haitiana, sobre todo en lo que respecta a las desigualdades socioeconómicas y el acceso a los servicios de salud. La BINUH y el equipo de las Naciones Unidas en el país han trabajado con el Gobierno para proteger a las personas vulnerables tratando la dinámica de incitación a la violencia por temor a la COVID-19 y centrándose en reducir la estigmatización. Al 31 de mayo, la BINUH había confirmado 27 incidentes alarmantes que afectaron a personas que habían dado positivo en las pruebas de detección del virus o que presuntamente lo habían contraído: siete conatos de linchamiento, ocho casos de amenazas de muerte y discursos de odio, cinco agresiones, cinco ataques a centros de atención y dos casos de denegación de tratamiento a personas presuntamente infectadas. Los migrantes y los deportados están en especial riesgo de estigmatización y violencia selectiva. Según la OIM, Haití recibe actualmente unos 4.000 repatriados por semana. Se prevé que ese tipo de incidentes aumente en las próximas semanas a medida que vuelven al país otros haitianos que han perdido sus empleos en la República Dominicana a causa de la pandemia.

29. Sensibilizar a los haitianos acerca de los peligros de la COVID-19 es esencial para combatir la desinformación y la discriminación y mitigar los efectos de la pandemia en todo el país. El Ministerio de Salud Pública y Población y otros agentes nacionales, como las organizaciones de derechos humanos del país, están realizando campañas de información pública —con apoyo de las Naciones Unidas y bajo la dirección del UNICEF— para aumentar el grado de conciencia y reducir el estigma mediante folletos, artículos de opinión, carteles, volantes y la difusión de mensajes a través de asociados y responsables de comunicación sanitaria. En consonancia con mi reciente llamamiento a la acción ante un posible aumento de la violencia doméstica, sexual y de género a causa de los confinamientos asociados a la COVID-19, se están realizando otras actividades de divulgación para contrarrestar la amenaza y prevenir los actos de explotación y abuso sexuales. Además, para luchar contra la pandemia, las Naciones Unidas, junto con asociados nacionales e internacionales competentes, están apoyando respuestas selectivas a problemas específicos de derechos humanos y ayudando a elaborar una estrategia multisectorial general de protección con la que tratar los riesgos más graves a los que se enfrentan las poblaciones afectadas y vulnerables.

30. La colaboración de las Naciones Unidas con la Oficina del Defensor del Pueblo, que está mostrando mayor capacidad de cumplir su mandato, está arrojando buenos resultados. En su calidad de miembro del comité establecido por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública a fin de definir los criterios necesarios para la liberación de presos, la Oficina ha incorporado consideraciones de derechos humanos a la tarea de mitigar los efectos de la pandemia. También ha desempeñado una importante función mediadora en el conflicto antes mencionado sobre las condiciones de trabajo de la Policía Nacional de Haití y el derecho de los agentes a sindicarse, una función que se ajusta a su estrategia nacional 2019-2024 y al objetivo de fomentar el diálogo en situaciones de conflicto que afecten a instituciones públicas.

31. La BINUH sigue prestando asistencia técnica para potenciar las aportaciones de la sociedad civil a los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas. La Misión y el UNFPA organizaron con motivo del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) un taller sobre género y derechos para agentes de la sociedad civil a fin de evaluar la aplicación de las recomendaciones formuladas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en 2016 y el segundo ciclo del Examen Periódico Universal de Haití de 2016. Del 19 al 21 de febrero, la Misión participó en un curso de capacitación organizado por Avocats Sans Frontières Canada

sobre las aportaciones de las organizaciones no gubernamentales nacionales que se ocupan de los derechos humanos a los mecanismos correspondientes, antes de que el Comité de Derechos Humanos celebre su período de sesiones de octubre de 2020, en el que se evaluará la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en Haití.

VI. Desempleo, juventud y otros grupos vulnerables (parámetro de referencia 5)

32. Avanzar en la creación de empleo y la reducción de las desigualdades socioeconómicas en un momento en que Haití debe lidiar con los múltiples efectos de la pandemia y una crisis humanitaria en ciernes es una tarea ingente. Las perspectivas económicas de Haití ya eran sombrías a principios de 2020, tras un 2019 difícil y marcado por una fuerte depreciación de la moneda, una tasa de inflación del 20 %, una contracción del 1,2 % del producto interno bruto real y aumentos del déficit fiscal, la deuda pública y los pagos atrasados en el país. El Fondo Monetario Internacional prevé que el producto interno bruto real del país caiga un 4 % en 2020 y que la inflación se sitúe por encima del 20 %. Hasta la fecha, las instituciones financieras internacionales y otros asociados han prometido 195,2 millones de dólares en apoyo directo a Haití, principalmente en forma de subvenciones para proyectos y asistencia presupuestaria. Si no recibe apoyo financiero adicional, el país tardará aún más en hacer frente a sus problemas de desarrollo.

33. La economía de Haití debe afrontar simultáneamente varias conmociones, en particular la reducción prevista de los ingresos fiscales, el aumento de los gastos para luchar contra la crisis y la disminución de la inversión extranjera directa, las exportaciones y las remesas. El Banco Mundial prevé que las remesas de los haitianos que viven en el extranjero disminuirán casi en una quinta parte en cuanto la recesión golpee las economías del Canadá, los Estados Unidos y Francia. El Gobierno de Haití, el sistema de las Naciones Unidas y los asociados bilaterales y multilaterales para el desarrollo están en conversaciones sobre la realización conjunta de una evaluación de los daños socioeconómicos a través de una lente de análisis de conflictos que permita determinar la magnitud de futuros paquetes de medidas de apoyo a Haití. Con esa evaluación se procurará determinar ámbitos esenciales de intervención para contribuir a sentar las bases de una recuperación más ecológica, resiliente y equitativa y atajar así las causas fundamentales de la inestabilidad y las vulnerabilidades del país. Esa labor se guiará por el marco mundial elaborado por el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible a fin de asegurar que los equipos de las Naciones Unidas en los países apoyan de manera coherente y eficaz la respuesta socioeconómica a la COVID-19.

34. El sector de la exportación de Haití, que se ha visto afectado con particular dureza, experimentará dificultades debido a la recesión económica mundial. Solo el sector de la confección, que representa el 90 % de las exportaciones manufactureras del país y en febrero generaba 56.000 puestos de trabajo, el 70 % ocupados por mujeres, ha sufrido graves perturbaciones de la cadena de suministro. En cumplimiento de las disposiciones gubernamentales, algunas fábricas textiles volvieron a abrir en abril con una capacidad reducida para producir equipo de protección personal, inclusive para distribución interna. Habida cuenta de su importancia en la economía haitiana, las Naciones Unidas han apoyado y seguirán apoyando prioritariamente al sector textil. Durante el período a que se refiere el informe, la Organización Internacional del Trabajo y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida, con el apoyo del UNFPA, lograron que 1.328 empleadas del sector de la confección pudieran acceder a los servicios de salud.

35. El Presidente está realizando actividades nacionales e internacionales de concienciación sobre los daños socioeconómicos de la pandemia y la necesidad de recuperarse y preparar el país para la fase posterior a la COVID-19. El 27 de marzo anunció que se harían transferencias directas de efectivo en beneficio de 1,5 millones de familias vulnerables. También subrayó la necesidad de desarrollar el sector agrícola a fin de aumentar la producción de alimentos y contribuir a evitar carestías en el futuro, y anunció un programa de distribución de semillas y la instalación de 10 sistemas de bombas de riego alimentadas con energía solar en varios departamentos. En esas circunstancias, el equipo de las Naciones Unidas en el país ha seguido apoyando los esfuerzos del Gobierno por fortalecer la capacidad y la resiliencia de las comunidades locales, los agricultores familiares y los interesados de los sectores público y no gubernamental, incluido el sector privado. El equipo de las Naciones Unidas en Haití también contribuye a promover mejoras en los medios de vida y las oportunidades de empleo, sobre todo en el sector agrícola. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, ONU-Mujeres, el PNUD, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente han aportado apoyo técnico y financiero, actividades de desarrollo de la capacidad, formación y concienciación, y ayuda a la investigación y la gestión de datos a las instituciones del Estado, los agricultores y los pescadores con el fin de aumentar la producción agrícola, la productividad y la calidad alimentaria. Parte de la asistencia de las Naciones Unidas se destina a ayudar a las asociaciones de mujeres y a las agricultoras a desarrollar unos medios de vida ecológicos, pequeñas explotaciones agrícolas y la gestión de viveros; prestar apoyo financiero y técnico para mejorar las técnicas agrícolas; promover la extensión agrícola y la agricultura de conservación; optimizar los pequeños sistemas de riego; valerse de la innovación tecnológica para mejorar la utilización del capital natural mediante tecnologías inocuas para el clima; mejorar las prácticas de agroecología y agroforestería; y desarrollar cadenas de valor.

36. Con el apoyo del Fondo para la Consolidación de la Paz, el sistema de las Naciones Unidas en Haití está preparando una serie de intervenciones socioeconómicas para fomentar la estabilidad y reducir la violencia comunitaria y de las bandas, que se centrarán particularmente en los jóvenes en situación de mayor riesgo. Con ellas también se intentará tratar las causas fundamentales de las formas de violencia señaladas respaldando dispositivos para un diálogo comunitario participativo en el plano local y proyectos de efecto rápido que fomenten la educación y el diálogo, creen empleo juvenil, mejoren las oportunidades de formación profesional y promuevan planes de microcrédito que permitan, sobre todo a las mujeres, obtener préstamos a bajo interés y subvenciones para reconstruir pequeñas empresas afectadas por la violencia de las bandas armadas.

VII. Prestación de servicios sociales básicos y resiliencia (parámetro de referencia 6)

37. Una comisión multisectorial para la gestión de la pandemia, establecida por el Presidente el 6 de abril, ha supervisado la elaboración de un plan nacional de respuesta multidimensional que abarca la atención a los pacientes, las comunicaciones, la logística, la vigilancia, los laboratorios y la investigación, la transparencia y la tecnología de la información. A fin de apoyar plenamente estas iniciativas, la respuesta sanitaria de las Naciones Unidas en Haití, dirigida por la OPS, la OMS, el UNFPA y el UNICEF, se centra en la detección temprana, el aislamiento y la atención de los presuntos casos y las actividades de divulgación en la comunidad para limitar la transmisión. El sistema de las Naciones Unidas ha contribuido a fortalecer la capacidad de vigilancia del país ayudando al Ministerio de Salud Pública y Población

a contratar y formar a epidemiólogos, personal de enfermería sobre el terreno y técnicos de laboratorio del país, y a incrementar la capacidad de realizar pruebas de laboratorio mediante el suministro de reactivos y otro equipo, incluidas 9.000 pruebas moleculares para la COVID-19. Para garantizar la protección de los trabajadores de primera línea que prestan asistencia, las Naciones Unidas han distribuido 34.000 artículos de equipo de protección personal a las instituciones y han capacitado a 1.152 trabajadores médicos y no médicos en el uso de dicho equipo, la prevención y el control de infecciones y la coordinación asistencial en presuntos casos de COVID-19. La OIM, junto con otros organismos de las Naciones Unidas, está respaldando la labor de las autoridades sanitarias y de migración de Haití en la frontera con la República Dominicana, por donde cada día pasan más migrantes. Por último, el Programa Mundial de Alimentos, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, el PNUD y otros organismos están apoyando las iniciativas encaminadas a reforzar la cadena de suministro, elemento crucial de una respuesta sin fisuras.

38. Como se preveía, los sistemas que se crearon o reforzaron para combatir el cólera están resultando ahora, con adaptaciones, útiles para otras crisis sanitarias, incluida esta pandemia. El proceso de muestreo que garantizaba el análisis de los presuntos casos de cólera se ha recalibrado para la COVID-19, y se han vuelto a poner en marcha varios equipos de respuesta de emergencia al cólera para hacer frente a la pandemia. Al mismo tiempo, las Naciones Unidas siguen dando prioridad a la lucha contra el cólera, y se centran en el fortalecimiento de los sistemas, la vigilancia, la respuesta rápida, la prevención y la coordinación. Han transcurrido más de 15 meses desde que se registró el último caso confirmado de cólera en Haití a principios de febrero de 2019 y desde entonces no se ha informado de ninguna muerte. En el primer trimestre de 2020, el Ministerio de Salud Pública y Población solo ha notificado hasta la fecha 68 presuntos casos de cólera, todos ellos con resultados negativos.

39. Además de todos los esfuerzos que se están realizando para responder con firmeza a la crisis sanitaria, es preciso abordar con urgencia una serie de cuestiones cruciales, como la designación, el equipamiento y la seguridad de las estructuras sanitarias dedicadas a la COVID-19 en todo el país, la mayor clarificación de la división institucional del trabajo entre las entidades nacionales y el crítico déficit de fondos destinados a la respuesta, en particular para el futuro inmediato. Las Naciones Unidas están colaborando activamente con sus asociados nacionales e internacionales para resolver estos problemas.

40. La pandemia y las medidas de contención agravarán una situación socioeconómica y humanitaria ya de por sí difícil. La llegada de la temporada de huracanes, que se extiende de junio a noviembre, podría generar aún más necesidades. Haití es uno de los diez países con más inseguridad alimentaria del mundo y más del 40 % de su población necesita ayuda humanitaria. En febrero, una encuesta nacional de nutrición respaldada por el UNICEF confirmó unos niveles alarmantes de malnutrición, al revelar un porcentaje de malnutrición aguda total del 6 % y un porcentaje de malnutrición aguda grave del 2,1 %. Incluso antes de la crisis de la COVID-19, el número de personas necesitadas de atención sanitaria había aumentado a causa de las limitaciones en el funcionamiento de los servicios de salud y el acceso a estos.

41. La actualización de 2020 del Plan de Respuesta Humanitaria para Haití 2019-2020, que fue presentada el 2 de marzo, asciende a 253 millones de dólares y aspira a llegar a 2,1 millones de los 4,6 millones de haitianos considerados más vulnerables, incluidos 1,3 millones de personas en el sector sanitario. A 8 de junio, recibió 29,9 millones de dólares. Algunas de las necesidades adicionales del país en relación con la respuesta sanitaria a la pandemia, estimadas en 105 millones de dólares, figuran en el plan general revisado de respuesta humanitaria que se presentó

el 7 de mayo. La evolución de otras necesidades humanitarias cruciales para el país se reflejará en el plan revisado que se publicará a finales de 2020.

42. Tras la suspensión temporal de la distribución por parte de las Naciones Unidas de alimentos y efectivo en varios departamentos entre el 19 de marzo y el 2 de abril, las autoridades haitianas, junto con los organismos de las Naciones Unidas, adaptaron los procedimientos de distribución de alimentos para reducir al mínimo el efecto de la pandemia en los más vulnerables. A petición de las autoridades locales, se distribuyeron raciones alimentarias para un mes a más de 30.000 personas en dos comunas de Artibonite (Ennery y Saint Michel de l'Attalaye), por si estas comunidades —estrechamente relacionadas con algunos de los primeros casos confirmados de COVID-19— fueran puestas en cuarentena. Tras el cierre de las escuelas el 19 de marzo, el Programa Mundial de Alimentos distribuyó las 946 toneladas de alimentos restantes de sus programas de alimentación escolar como raciones para llevar, a fin de que llegaran a las familias de los alumnos. El Ministerio de Agricultura, Recursos Naturales y Desarrollo Rural también distribuyó ayuda a más de 30.000 hogares vulnerables en cinco departamentos, a fin de complementar los medios de subsistencia agrícolas durante la temporada de primavera y evitar que aumentara la inseguridad alimentaria a raíz de la pandemia.

43. La pandemia ha centrado la atención en la necesidad de que Haití encuentre soluciones estructurales y más sostenibles para los problemas y vulnerabilidades de larga duración, incluida la exposición del país a los peligros naturales. Deben proseguir las iniciativas encaminadas a continuar promoviendo el desarrollo sostenible y aumentar la resiliencia del país frente a crisis futuras. Un buen ejemplo es la política nacional de promoción y protección social, que está pendiente de aprobación por el Consejo de Ministros y que representaría un importante paso hacia la reducción de la pobreza, la disminución de la desigualdad, el empoderamiento de las mujeres y los hombres y la reducción de la dependencia de la asistencia humanitaria.

44. Del mismo modo, las inversiones estructurales a largo plazo en ámbitos como la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático aumentarían la resiliencia de Haití frente a las crisis y reducirían su dependencia de la asistencia humanitaria y de los sistemas de respuesta urgente a crisis. El apoyo a la Dirección de Protección Civil, que fortalece la capacidad de coordinación de los centros de operaciones de emergencia en los planos nacional y departamental, se ha redirigido hacia la respuesta a la pandemia y la preparación para la próxima temporada de huracanes. Además, las Naciones Unidas están respaldando iniciativas encaminadas a crear nuevas zonas protegidas, restaurar los ecosistemas y mejorar el control de la erosión, la gestión de los recursos naturales y la planificación de la gestión de residuos, en el contexto de la reducción del riesgo de desastres.

VIII. Postura operacional e integración

45. Desde que el 19 de marzo se confirmaran los dos primeros casos de COVID-19 en Haití, el sistema de las Naciones Unidas ha respaldado las iniciativas nacionales encaminadas a combatir la pandemia y mitigar sus repercusiones socioeconómicas, al tiempo que ha seguido avanzando en las tareas encomendadas por el Consejo de Seguridad. Se establecieron medidas para reducir el perfil de riesgo de la Misión mediante la aplicación de acuerdos de teletrabajo. El equipo de las Naciones Unidas en el país también adoptó medidas similares para llevar a cabo actividades esenciales, especialmente las que salvan vidas, limitando al mismo tiempo el riesgo para el personal e impidiendo la propagación de la COVID-19. Los esfuerzos por encontrar lugares para la posible evacuación médica del personal que se vea afectado por la

COVID-19 han sido fructíferos. Ahora se exige que haya un vehículo de transporte aéreo para casos de COVID-19 en la región, con planes de evacuación médica plenamente operativos.

46. El marco estratégico integrado de la iniciativa Una ONU, que fue aprobado por los principales responsables de las Naciones Unidas el 19 de febrero, constituye una visión unificada del sistema de las Naciones Unidas en Haití articulada en torno a seis puntos de referencia. El plan, que guía las iniciativas colectivas de la Organización en 2020 y 2021, tiene por objeto centrar sus recursos de asesoramiento y programación en los obstáculos estructurales y multidimensionales, a fin de lograr la estabilidad a largo plazo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aunque es probable que los efectos de la pandemia requieran que se ajuste el plan, la COVID-19 no hace sino subrayar la urgencia de emprender acciones conjuntas en los ámbitos identificados en la iniciativa Una ONU, vinculando la ayuda inmediata a los objetivos a más largo plazo de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y abordando los déficits y las vulnerabilidades estructurales en materia de desarrollo para ayudar a Haití a recuperarse mejor.

47. Concluida la fase inicial, la BINUH está ultimando el proceso de adquisición de los nuevos locales de la sede, con vistas a su traslado una vez que la pandemia se haya contenido. La Misión sigue haciendo lo posible por mejorar la eficiencia examinando los contratos de servicios con el objetivo de reducir los costos. El 14 de febrero, la BINUH transfirió oficialmente al Gobierno el parque de tanques de combustible de la antigua Misión de las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití, lo cual ha permitido ampliar de forma considerable la capacidad de almacenamiento de combustible del país. Además, aunque sigue habiendo algunos problemas de logística y suministro, la sede y las direcciones centrales de la Policía Nacional de Haití se trasladaron a las secciones de la base logística que dejaron vacías la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití y la Misión de las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití, mientras la BINUH continúa con los trabajos de limpieza ambiental. Además, la rehabilitación de los emplazamientos compartidos por la policía y el equipo penitenciario de la BINUH está casi terminada, y todos los emplazamientos estarán plenamente operativos, cuando las circunstancias lo permitan, para apoyar al personal directivo superior de la Policía Nacional en las actividades diarias y la planificación estratégica.

IX. Explotación y abusos sexuales

48. La política del Secretario General de tolerancia cero frente a la explotación y los abusos sexuales sigue siendo una prioridad para las Naciones Unidas en Haití, donde no se han confirmado nuevos casos desde el cierre de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití. Con el apoyo de la Defensoría de los Derechos de las Víctimas en la Sede de las Naciones Unidas, la Oficial Superior de Derechos de las Víctimas de la BINUH está aplicando una estrategia internacional de todo el sistema para ayudar a las víctimas a presentar reclamaciones de paternidad y pensión por alimentos en las jurisdicciones donde puedan presentarse. Como parte de la estrategia de concienciación de la BINUH, se emitieron mensajes de radio para informar a la ciudadanía en general sobre la política del Secretario General, y en particular sobre los derechos de las víctimas. La BINUH también estableció un mecanismo de reclamación y siguió derivando casos, con la ayuda de la Oficina de Protección de la Ciudadanía. Se sigue prestando apoyo educativo, financiero y alimentario a los niños nacidos como consecuencia de la explotación y los abusos sexuales cometidos por el personal de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas que estuvo desplegado en Haití. Varios países se han coordinado con las autoridades haitianas para entrevistar a víctimas de la explotación y los abusos

sexuales, como parte de las medidas destinadas a evitar que estos delitos queden impunes. Se han puesto a disposición de las entidades de las Naciones Unidas y los asociados en la ejecución módulos de capacitación en línea sobre la prevención de la explotación y los abusos sexuales, como parte de la respuesta a la pandemia.

X. Observaciones

49. Es necesario responder con firmeza a la pandemia de COVID-19 en Haití, un país cuya anterior fragilidad se ha visto exacerbada por 18 meses de una prolongada crisis política, económica, social e institucional, a fin de evitar una erosión de la estabilidad nacional y mitigar los riesgos para la seguridad y el desarrollo. Si la situación humanitaria y socioeconómica de Haití sigue empeorando, el sufrimiento humano puede ser considerable y se podrían producir grandes éxodos de población, lo cual tendría importantes repercusiones en la región.

50. Es preciso abordar con urgencia las dimensiones socioeconómicas y de salud pública de la pandemia en Haití. Si bien el Gobierno de Haití se apresuró a adoptar un número considerable de medidas drásticas para frenar la propagación del virus, es preciso seguir esforzándose por aclarar y fortalecer aún más los acuerdos de coordinación de la respuesta; alentar a todos los sectores de la sociedad a que sigan movilizados y dando una respuesta coherente, eficaz, polivalente y que tenga en cuenta las cuestiones de género; y garantizar la transparencia en la utilización de los fondos destinados a las respuestas sanitaria y socioeconómica. Las autoridades nacionales tienen que tomar decisiones críticas con rapidez, por ejemplo, aclarar qué estructuras sanitarias estarán a la vanguardia de la atención al paciente, reforzar las medidas en la frontera con la República Dominicana y contener el brote en las cárceles y los centros de detención. Además, es necesario impulsar las actividades de comunicación, no solo para que se comprendan y se cumplan plenamente las medidas preventivas, sino también para contrarrestar el preocupante aumento de la estigmatización y la discriminación.

51. Sin embargo, Haití no puede afrontar la pandemia solo. Necesita el apoyo infatigable de sus asociados humanitarios y para el desarrollo. El sistema de las Naciones Unidas en Haití ha adaptado sus actividades y su estrategia de movilización de recursos para dirigir su ayuda inmediata hacia la respuesta nacional a la pandemia y contribuir a la protección social y la recuperación económica temprana, que son prioritarias. Dado que varios asociados ya han anunciado que van a asignar o reasignar fondos a esta crisis, hago un llamamiento a la comunidad internacional, incluidos ante todo los asociados regionales, para que incrementen el apoyo financiero, técnico y político a Haití en estos tiempos difíciles.

52. Es crucial que las intervenciones inmediatas y específicas destinadas a frenar y combatir la pandemia no resten importancia a los objetivos a más largo plazo ni a los persistentes problemas estructurales del país. Tenemos que asegurarnos de aprovechar la crisis como una oportunidad para recuperarnos mejor juntos. La Agenda 2030 sigue brindando un ideal a largo plazo y un marco multidimensional para orientar las medidas de respuesta inmediata y las inversiones a más largo plazo, con miras a una recuperación más ecológica e inclusiva. Exhorto al equipo de las Naciones Unidas en el país y a todos los asociados a que adopten todas las medidas posibles para ampliar la ayuda a Haití y a que se aseguren de que las actividades sanitarias y socioeconómicas sean prioritarias en el contexto de la respuesta a las importantes repercusiones de la COVID-19 y contribuyan a los citados objetivos a largo plazo. Hay que poner fin al “cortoplacismo” por el que a menudo se han caracterizado las iniciativas de respuesta a las crisis en Haití.

53. La Policía Nacional de Haití superó otra prueba importante al demostrar un profesionalismo y una moderación mayores en el mantenimiento del orden público, en particular durante una serie de eficaces operaciones contra las bandas de delincuentes, al tiempo que asumió la carga adicional de hacer cumplir las medidas restrictivas del Gobierno para frenar la propagación de la COVID-19. También ha abordado problemas laborales internos y ha mejorado su marco regulatorio, mientras ha avanzado en el seguimiento de las denuncias relacionadas con los derechos humanos y el cumplimiento de las normas de derechos humanos. A pesar de estos logros, sigue sin resolverse el problema a más largo plazo de dotar a la policía de recursos suficientes. Este problema sigue poniendo en peligro la vida de los agentes de policía y supone un riesgo para la continuidad de los avances logrados en la profesionalización y la eficacia de la fuerza policial.

54. La reactivación de las bandas delictivas en plena pandemia está agravando los problemas de los más vulnerables y empeorando una situación ya de por sí inestable. Dicha actividad genera gran preocupación y confirma nuevamente que se necesitan iniciativas holísticas, integradas e ininterrumpidas para combatir el flagelo de las bandas y mejorar el acceso a los servicios básicos en las zonas donde estos grupos ejercen su violenta influencia. Acojo con satisfacción la finalización de la estrategia multidimensional nacional sobre desarme, desmantelamiento, reintegración y reducción de la violencia comunitaria bajo la égida de la Comisión Nacional Haitiana para el Desarme, la Desmovilización y la Reintegración. También aliento a todos los agentes pertinentes a que la respalden con todo su apoyo político y a las instituciones competentes, a que cooperen plenamente en su aplicación.

55. Resulta decepcionante que el número de personas liberadas de las cárceles haitianas en el contexto de las medidas de mitigación de la COVID-19 siga siendo ínfimo, a pesar de que se han confirmado casos entre la población reclusa. Si bien se han adoptado importantes medidas en la dirección correcta, la situación del sistema penitenciario haitiano sigue siendo alarmante, debido al hacinamiento y a la falta de alimentos, medicamentos y servicios para los detenidos. Esta situación ilustra las grandes deficiencias que siguen asolando el sistema de justicia haitiano. Con el 74 % de la población reclusa en espera de juicio y un código penal obsoleto, la duración y la naturaleza farragosa de las actuaciones judiciales siguen impidiendo el acceso a la justicia y ponen en peligro el derecho a las debidas garantías procesales, sobre todo en lo que respecta a la legalidad de la prisión provisional. El sistema de las Naciones Unidas en Haití seguirá apoyando al Gobierno del país en su empeño por ejercer la voluntad política y el liderazgo necesarios para, de forma constante y en cantidad suficiente, proporcionar servicios y suministros de subsistencia a las cárceles, y hacer avanzar con rapidez las reformas judiciales encaminadas a resolver los persistentes problemas del encarcelamiento en el país.

56. La fragilidad del estado de derecho en Haití sigue traducéndose en el incumplimiento por parte del Estado haitiano de su obligación de proteger el derecho de sus ciudadanos a la seguridad, la vida y la integridad física. También socava las iniciativas encaminadas a combatir la impunidad, al negar la justicia y la reparación a las víctimas y generar un entorno propicio a una mayor violencia. Los recientes acontecimientos en la zona de Village-de-Dieu de Puerto Príncipe recuerdan a una serie de incidentes anteriores, como los asesinatos de La Saline, Grand Ravine y Bel Air, cuyos autores siguen prófugos. La ejecución de las órdenes de detención pendientes, el rápido avance de las actuaciones judiciales y la pronta aplicación del plan de acción nacional de derechos humanos siguen siendo fundamentales para proteger de manera eficaz esos derechos y restablecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado.

57. El fracaso en febrero de las iniciativas de diálogo encaminadas a alcanzar un acuerdo político hizo que se perdiera otra oportunidad para el diálogo y el acuerdo sobre las reformas constitucionales, institucionales y estructurales a largo plazo que se necesitan para respaldar la estabilidad y la eficacia del Estado, en particular en lo que respecta a ofrecer las oportunidades económicas, los servicios básicos y la protección que merecen los ciudadanos haitianos. Sin embargo, está surgiendo otra oportunidad en el contexto de la respuesta a la pandemia, y no debe desperdiciarse. Los agentes políticos, del sector privado y de la sociedad civil han superado sus diferencias y demostrado su solidaridad, y así han contribuido directamente a la respuesta a la pandemia prestando apoyo financiero, organizando la entrega de ayuda y poniendo en marcha actividades de concienciación pública. Me alienta esta muestra de cohesión nacional tan necesaria, que responde a la necesidad de unidad nacional y a las expectativas que desde hace tiempo tiene la población haitiana respecto de sus dirigentes, tras meses de amargas divisiones políticas. Hago un llamamiento, con renovada urgencia, a todos los agentes políticos para que aprovechen las oportunidades de cooperación que brinda esta crisis y promuevan la confianza y la colaboración con miras a abordar, a largo plazo, las causas fundamentales de la inestabilidad política e institucional de Haití.

58. Para concluir, quisiera expresar mi sincera gratitud a mi Representante Especial para Haití, Helen Meagher La Lime, y a mi Enviada Especial para Haití, Josette Sheeran, por su liderazgo y compromiso. También doy las gracias a mi Representante Especial Adjunto, Coordinador de Asuntos Humanitarios y Coordinador Residente, Bruno Lemarquis, a todos los miembros del equipo de las Naciones Unidas en el país y a todo el personal de las Naciones Unidas por su incansable labor, su dedicación y su notable capacidad de adaptación a las difíciles condiciones de trabajo sobre el terreno y a las limitaciones operacionales que ha traído consigo la pandemia. El sistema de las Naciones Unidas está dispuesto a ayudar a los interesados y las instituciones de Haití promoviendo la colaboración de toda la sociedad para hacer frente a la amenaza de la COVID-19 y sentando las bases para ejecutar un programa de reforma consensuado y celebrar un proceso electoral acorde con las normas constitucionales. Reitero la determinación de las Naciones Unidas de acompañar a Haití en estos tiempos difíciles y contribuir a su estabilización y su prosperidad a largo plazo.